

# Crónica del mes

Octubre

Dinámicas políticas, sociales y económicas se conjugaron en octubre para hacer más difícil la vida de los salvadoreños. Sin dejar de lado los influjos de la situación internacional, últimamente tan tensa —ello sería como cerrarse a la verdad—, vale la pena hacer un ejercicio de evaluación interna y plantearse hipotéticamente las razones que han llevado a configurar la situación actual del país. Concretamente, en una coyuntura posterremotos que plantea serios desafíos para los salvadoreños y con agravantes como la amenaza terrorista y el clima de guerra, ¿cómo los actores nacionales han respondido al compromiso de la reconstrucción en las actuales condiciones? En general, el escenario político ha estado marcado por una mayor confrontación partidaria en un ambiente que permite augurar la intensidad del período electoral que se impone en el horizonte próximo. Por otro lado, en el ámbito económico se muestra a los ojos del observador una coyuntura difícil en sí misma, en la que se plantea la necesidad de reestructuraciones en la manera tradicional de gestionar la economía nacional. La recurrente crisis del sector cafetalero y de la micro y pequeña empresa son una muestra palmaria de ello. Finalmente, las dinámicas sociales operadas en octubre dan cuenta de un descontento generalizado de la ciudadanía ante la insatisfacción de sus demandas, descontento que se ha convertido, en el peor de los casos, en acciones de violencia y discrecionalidad. Empero, uno de los síntomas que más preocupa es la poca atención gubernamental en los sectores sociales como salud y educación; y es que, a pesar de los intentos realizados en la materia, no ha sido posible cubrir las más ingentes necesidades. Problemas como el del agua, la basura, la pobreza, la delincuencia, la marginalidad, la falta de empleo constituyen todavía un serio reto para las autoridades tanto centrales como locales.

La transición de septiembre a octubre fue crucial en la trayectoria de los principales partidos políticos salvadoreños. Por un lado, las fuerzas al interior del FMLN pusieron de manifiesto con mayor contundencia sus diferencias ideológicas, haciendo inevitable la confrontación a todo nivel dentro de las estructuras partidarias. La diferencia más visible se dio en el seno de la fracción legislativa efemelenista. Tras la expulsión del líder renovador, Facundo Guardado, por decisión de un cuestionado “tribunal de honor”, los seis diputados renovadores en la Asamblea decidieron votar alejados —incluso en contra— de sus compañeros de fracción. Adicionalmente, al otro lado del escenario político, la XX Asamblea General Ordinaria de ARENA había concluido, el 30 de septiembre, con la elección de los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), principal órgano directivo del partido. En aquella oportunidad, el nuevo presidente del COENA, Roberto Murray Meza, lanzó un reto a los areneros: “no podemos permitir que aquellos que queman las ofrendas florales y queman banderas de los países amigos lleguen a gobernarnos”, en clara alusión a miembros del FMLN —entre ellos el jefe de la fracción legislativa, Salvador Sánchez Cerén— que acompañaron la marcha del pasado 15 de septiembre, en la que se expresaron loas a los atentados terroristas en Estados Unidos. No obstante, la elección de las nuevas autoridades areneras no había sido del agrado de todos los asambleístas, especialmente del grupo de los “fundadores” del partido, autodenominado Liga de Areneros al Rescate (LAR), una de cuyos miembros, Gloria Salguero Gross, afirmó que “ARENA ha sido privatizado”.

En octubre quedó en evidencia la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública nacional. Efectivamente, los medios de derecha se

encargaron de presentar una imagen renovada del partido oficial, escondiendo deliberadamente el descontento de los "fundadores". En cambio, se propusieron la tarea de manifestar una imagen decadente del FMLN, escondida tras el divisionismo interno. Y ello porque, lo que los salvadoreños han visto de ambos partidos ha estado fuertemente influido por lo que los medios de comunicación —sobre todo los más fuertes en el mercado televisivo, periodístico y radial— los han hecho ver. El caso de ARENA es singular, pues no sólo ha contado a su favor con medios de comunicación —los más poderosos económicamente— que lo respaldan abiertamente, sino que ha encontrado en ellos el espacio para hacer de sus preocupaciones estratégicas temas de agenda informativa. Dicho de otro modo, ARENA ha contado con un importante espacio mediático para hacer ver a los salvadoreños aquello que conviene a sus intereses. Proprietarios de periódicos, de canales de televisión y de emisoras de radio, acompañados de un séquito de periodistas, de colaboradores y de analistas, han estado prestos no sólo a dar expresión editorial, informativa o reflexiva a lo que sea de ayuda al partido, sino para encauzar las demandas publicitarias emanadas del mismo.

En el FMLN, los salvadoreños han visto disputas interminables, rupturas inminentes, incoherencias políticas, falta de claridad en los planteamientos y desatinos de todo tipo en el desempeño político cotidiano. Los medios de derecha fueron los encargados de hacer que los salvadoreños no olvidasen que el FMLN es precisamente eso: caos, desorden, incoherencias, rivalidades y confusión política e ideológica. No es que todo ello haya sido un invento de los medios; no es que en el FMLN no haya habido efectivamente mucho de deterioro institucional. Como quiera que sea, las dinámicas experimentadas por ambos partidos —y la percepción que la ciudadanía ha tenido de ello— se circunscriben al ambiente preelectoral, de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2003 y 2004, respectivamente.

El primer día del mes, los medios revelaron las supuestas intenciones de un grupo arenero "clandestino" de relevar al jefe de la bancada de ARENA, René Figueroa. La supuesta intención —proporcionada a los medios por personas que pidieron el anonimato— no pasó de ahí, pues pronto los rumores se disiparon en un mar de noticias cuyo énfasis favorecía a los intereses electorales areneros. Posteriormente, el 7, el nuevo presidente del partido, Murray Meza, durante la conmemora-

ción de los 20 años de fundación de ARENA, apostó por la unidad como único camino para mantenerse como primera fuerza política de El Salvador. Ese día, fueron juramentados los nuevos miembros del COENA. Además, el 1 se dio otro hecho decisivo en la actual coyuntura preelectoral. La corriente "renovadora" del FMLN recibió un duro golpe, luego que el tribunal de honor del partido resolviera expulsar al líder renovador Facundo Guardado, debido a infracciones al reglamento interno efemelenista. La decisión se dio después de tres meses de juicio político. El tribunal además ordenó a la Secretaría Nacional de Organización (SNO) cancelar a Guardado la ficha de afiliación "por haber violado flagrantemente el reglamento Disciplinario, la Carta de Principios y Objetivos y los Estatutos". Sorprendido por la resolución, Guardado expresó: "yo sigo siendo orgulloosamente del FMLN, mi militancia en el partido sólo me la puede quitar Dios, por lo tanto no me la puede quitar ningún tribunal p... que no existe". Pronto se agudizaron las diferencias al interior del partido. Los seis diputados renovadores de la bancada legislativa desconocieron a su jefe de fracción, el ortodoxo, Salvador Sánchez Cerén. Adicionalmente, renovadores disidentes, entre ellos el alcalde capitalino, Héctor Silva y el "tercerista" Gerson Martínez, condenaron la expulsión de Guardado. "No es el partido que queremos, no es la izquierda que queremos y yo no estoy dispuesto a militar en este tipo de izquierdas", expresó Silva, una de las figuras más emblemáticas del partido.

Al día siguiente, los diputados renovadores anunciaron que desconocerían las directrices del partido, y por tanto, las de su jefe de fracción. Al mismo tiempo, el máximo ente dirigencial del partido, la Comisión Nacional Transitoria (CNT), se mostró en contra de la expulsión de Guardado y lamentó que el tribunal de honor no les haya consultado antes de emitir el fallo. El 4, los diputados renovadores levantaron sus manos para ratificar el Tratado de Libre Comercio con Chile, uniéndose a los votos de ARENA, PCN, PDC, PAN y CDU. Mientras tanto, un grupo de simpatizantes renovadores marchaba hacia el local del partido en San Salvador, para denunciar la supuesta exclusión ilegal de militantes en el padrón electoral del partido. Posteriormente, la fracción efemelenista entera dio sus votos para aprobar un contrato de préstamo por más de 90 millones de dólares, destinados a la reconstrucción del Puerto de Cutuco, en La Unión. El 5, los renovadores plantearon a la dirigencia del partido una serie

de demandas, de cara al proceso electoral interno. En primer lugar, demandaron la inclusión de las personas que habrían quedado fuera del padrón electoral; seguidamente, exigieron la creación de un organismo contralor del proceso electoral interno, en el que estarían representadas todas las tendencias de manera equitativa. El 8, la CNT evitó conocer las demandas de los renovadores y acordó que fuese el Consejo Asesor el encargado de estudiarlas y emitir las recomendaciones pertinentes. Dicho Consejo fue conformado por ortodoxos, terceristas y renovadores disidentes.

El 9, Héctor Silva olvidó las palabras lapidarias que él mismo había expresado tras la expulsión de Guardado y se presentó ante la sede capitalina del FMLN para acreditarse como candidato a ocupar una de las 37 cuotas dentro del Consejo Nacional. “Lo hago porque creo en el proceso, el cual, si tiene errores, el trabajo es superarlos; y por eso mi voluntad de participar”, expresó el jefe edilicio. El 12, el “tercerista” Gerson Martínez se lanzó a la candidatura para coordinador general del partido. Pero, hasta el 13, los renovadores no habían definido si presentarían a un candidato para la contienda interna de noviembre. “Se han dado señales de voluntad para corregir los problemas de padrón [electoral interno del FMLN], pero aún tenemos que evaluar bien el proceso para decidir nuestra participación”, comentó Facundo Guardado. El 14, en el marco de la celebración del aniversario de la fundación del FMLN, el presidente de la Comisión Nacional Transitoria, Fabio Castillo, exhortó a los militantes del FMLN quienes, según él, habían respondido a las directrices de la derecha a salir del partido. Castillo afirmó que se respetaría esa línea de pensamiento, pero no al interior del FMLN. La celebración no contó con la participación de ninguno de los miembros del movimiento renovador.

El 16, el FMLN dejó abierta la campaña proselitista, de cara a las elecciones internas del 25 de noviembre. El inicio de campaña marcó la pugna entre las corrientes del FMLN luego de que se presentaran los candidatos para coordinador general del partido. Por la corriente revolucionaria socialista (ortodoxa) se acreditó, a última hora, Salvador Sánchez Cerén; por su parte, los renovadores, a pesar de sus dudas respecto de la transparencia de las elecciones, postularon al diputado de la Asamblea Legislativa, Francisco Jovel. A ellos se sumó Gerson Martínez, quien ya se había inscrito

en la contienda. Finalmente, ingresó a la contienda Ángel Enrique García, considerado candidato independiente. “Debemos preparar el triunfo de las elecciones de 2003 y 2004 y se requiere un partido unido, un programa que resuelva los problemas y vincule a la gente y la reunificación del partido alrededor de su identidad histórica”, expresó el líder ortodoxo, Sánchez Cerén. Por su parte, Jovel se comprometió a realizar un esfuerzo de concertación al interior del FMLN si resultara ganador. “Si ganamos los renovadores te juro que vamos a hacer el más serio esfuerzo de concertación con todos”, dijo Jovel. Del resultado de las elecciones se otorgarán 17 plazas automáticamente: una al coordinador general, otra al jefe de alcaldes, otra al jefe de la fracción legislativa y 14 para los coordinadores departamentales. El 28, los cuatro aspirantes comenzaron sus actividades de proselitismo en los departamentos de La Libertad y Sonsonate.

Indudablemente, uno de los hechos que más calaron en la opinión pública salvadoreña han sido los atentados terroristas en Estados Unidos y la posterior ofensiva militar en Afganistán. El escenario en todo el territorio centroamericano estaba preparado para el apoyo de los presidentes ante cualquier represalia militar estadounidense. El 4, durante la IX reunión de la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC), los jefes castrenses de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, manifestaron su intención de reforzar los mecanismos de seguridad y de inteligencia en el área. Desde la ciudad de Managua, la CFAC puso a disposición del gobierno de Estados Unidos, la Unidad de Rescate Humanitario (URH) integrada por efectivos de las cuatro repúblicas, que tendría como tarea brindar el apoyo necesario en atención a personas afectadas por el terrorismo. El 5, al concluir el cónclave, el presidente de CFAC, el nicaragüense, Omar Hallenslevens, expresó que la reunión tenía como fin “proporcionar un nivel óptimo de defensa contra las amenazas a la democracia, la paz y la libertad”. En este ambiente de expectativa y de respaldo de los gobernantes y fuerzas armadas de Centroamérica ocurrió lo inevitable. Tanto la prensa como la radio y la televisión nacionales saturaron espacios para cubrir, desde el domingo 7 de octubre, el inicio de la esperada represalia militar en contra del régimen talibán que controla Afganistán desde 1996 —mediante la ejecución de un “sistema islámico total”— y que resguarda a Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo. Mediante la operación “libertad duradera”, Estados

Unidos y su principal aliado, Gran Bretaña, inician la primera oleada de bombardeos contra objetivos militares en las principales ciudades de Afganistán. A medida que avanzaba la operación y se dieron los primeros combates en tierra, los ataques impactaron en puntos de concentración civil, causando la muerte de cuatro funcionarios locales de la ONU y un número indeterminado de muertos o heridos en un hospital militar; además, según las autoridades del régimen talibán, habrían causado la muerte de más de un centenar de civiles.

Luego del inusitado ataque terrorista en Nueva York y Washington, la clase política salvadoreña, los grandes actores económicos nacionales y algunos ciudadanos "de a pie" encontraron espacios en los medios de comunicación para expresar sus opiniones y expectativas ante el incierto panorama nacional e internacional. Similar situación se dio a partir de la represalia militar aliada sobre Afganistán; aunque, en este caso, sí hubo una mayor polarización de opiniones. Los sectores gubernamentales y del partido oficial justificaron las acciones militares, fieles al discurso de "defensa de la libertad y la democracia", abanderado por Estados Unidos y, en general, por los gobernantes occidentales. Una línea más moderada condenaba el terrorismo, pero, a la vez, señalaba la necesidad de garantizar la integridad física y moral de miles de personas inocentes que fácilmente podrían convertirse en blancos indirectos de los ataques aliados, de los desenfrenos xenofóbicos o de la misma represalia ideológica-religiosa. En términos generales, en El Salvador se siguió manteniendo una postura ideológica peligrosa ante la situación, a saber, una injusta identificación entre musulmán y terrorista, inspirada en una lectura maniquea de la realidad. Frases como la del presidente de la Asamblea Legislativa, Walter Araujo, de ARENA, quien expresó lo siguiente: "esperamos que las verdaderas fuerzas democráticas que amamos la libertad, logremos esa victoria contra el terrorismo. Las fuerzas del bien se impondrán a las fuerzas del mal", son prueba de ello. Otro diputado arenero, Guillermo Gallegos, legitimó los ataques aliados en Afganistán: "Estados Unidos ha actuado en una acción legítima, y que el país del norte cuenta con el apoyo de otras naciones en este combate". Por otra parte, el legislador del Partido de Conciliación Nacional, Antonio Almendáriz, expresó que "Estados Unidos está realizando una demostración necesaria para que quede claro que ya es tiempo

de quitar la impunidad al terrorismo internacional".

En contraste, los medios recogieron además otras impresiones de figuras de oposición y de ciudadanos que desaprobaban la violencia. "Nos hemos visto precisados a indicar que nuestro partido no avalará ninguna medida que combata al terrorismo causando daños a la población civil inocente", comentó Fabio Castillo, del FMLN. Asimismo, el también efemelenista Roberto Lorenzana agregó que "hay que hacer un esfuerzo por no amenazar la paz internacional"; finalmente, un ciudadano salvadoreño residente en California expresó su inconformidad con la represalia militar: "no estoy de acuerdo con las actividades de los talibán, pero tampoco estoy de acuerdo con la matanza de personas inocentes". Los medios se dedicaron después a divulgar información sobre la operación militar, y los políticos salvadoreños se ocuparon nuevamente de sus faenas diarias. El 22, los elementos del Ejército y de la Policía se apostaron en las tres aduanas terrestres y en las fronteras del país, como parte del plan gubernamental de prevención del terrorismo internacional. Unos mil elementos se sumaron a los ya existentes, desde el pasado 23 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional de Comalapa y el Puerto de Acajutla. Al día siguiente, el ministro de Gobernación, Francisco Bertrand Galindo, reveló que el control en las aduanas había dado como resultado el decomiso de un cargamento con municiones y más de 12 lotes de electrodomésticos no declarados.

En otro orden, durante octubre aparentemente, volvió la tranquilidad al interior del sistema judicial salvadoreño. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se habían enfrascado en una lucha intestina que ya parecía reflejar los intentos del fiscal general por ganar protagonismo ante la rotunda pérdida de casos emblemáticos sobre delitos que conmovieron la opinión pública nacional. La valiosa investigación que realizó el fiscal especial, Roberto Vidales, reveló la existencia de algunos profesionales de justicia, quienes habrían obtenido sus títulos universitarios de manera fraudulenta. Cada vez que se daba la oportunidad, fiscales y jueces se contradecían en sus decisiones. Esta vez, Fiscalía y jueces no supieron trabajar conjuntamente en un posible caso de narcotráfico en el país. La resolución de la jueza de Paz, de Intipucá, en el departa-

mento de La Unión —quien el 14 dejó en libertad a dos pilotos extranjeros que habían sido detenidos bajo cargos de narcotráfico—, provocaría un nuevo enfrentamiento con la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia anunció, el 15, que se pediría un informe de la resolución judicial de la jueza de Paz de Intipucá. El 16, el jefe de división de fronteras de la Policía Nacional Civil (PNC), Subinspector Oswaldo Portillo, aseguró que los dos extranjeros fueron recapturados por violar la Ley de Migración, y que se encontraban a la orden de la Dirección de Migración, la cual tramitaría su deportación del país. Pero, el 20, debido a la falta de coordinación entre fiscales y jueces, los pilotos fueron deportados hacia sus países de origen, poniendo punto final a un posible avance en el combate al narcotráfico en El Salvador. Finalmente, la Fiscalía recibió un nuevo golpe, luego que, el 17, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante la 57 asamblea en Washington, emitiera una condena contra el Ministerio Público por considerar que algunas de sus actuaciones inhibieron el flujo de información. La SIP pidió además a la Asamblea Legislativa que derogase el artículo 324 del Código Penal, que señala que el funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones o documentos que debieran permanecer secretos o facilitare el conocimiento de los mismos, será sancionado de dos meses a tres años.

En el recinto legislativo se polarizaron aún más las opiniones respecto a los temas de mayor interés nacional. Una de las iniciativas más polémicas y difíciles del Concejo Municipal de San Salvador había sido la regulación de la venta de licor, al restringirla a partir de la medianoche. Pero, mientras ciudadanía y Policía se congratulaban de la disminución de delitos causados por personas en estado de ebriedad, los diputados de derecha —acompañados por algunos medios de comunicación— se empeñaron en anular la disposición municipal por la vía legislativa. Así, en un hecho que fue leído como respuesta a los intereses de los propietarios de negocios y a la misma industria cervecera y licorera, los diputados de la Asamblea redujeron dos horas (de las 2 a.m. a las 6 a.m.) a la restricción de la venta de licor. La medida se aplicaría en todo el territorio nacional, en detrimento de la tranquilidad y seguridad ciudadana.

El 23, las fracciones legislativas de ARENA, PCN y PDC comprometieron sus votos para apro-

bar una reforma a la Ley de Comercialización de Alcohol y de Bebidas Alcohólicas. De paso, los legisladores estarían invalidando la ordenanza municipal en San Salvador que imponía esas restricciones desde la medianoche. Al respecto, el alcalde de Nueva San Salvador, Óscar Ortíz, aseguró que la reforma se alejaba de las demandas ciudadanas. “Con esto se está diciendo: que siga el desorden, que siga la intranquilidad, los relajos y los accidentes de tránsito”, comentó el edil efemenista. El 24, por 47 votos fue aprobada la enmienda a la ley de licores. Los legisladores del FMLN lamentaron que en la enmienda se haya protegido la venta de cerveza otorgando con ello beneficios a la industria cervecera salvadoreña, cuyo mayor representante es también el presidente de ARENA, Roberto Murray Meza. El 25, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Sandoval, se pronunció en contra de la reforma a la ley, debido a que la restricción desde la medianoche había incidido en la disminución de delitos. El 26, el alcalde capitalino en funciones, Francisco Altschul, hablando por el concejo municipal pidió al presidente Flores “que tome en cuenta la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía”, para vetar las reformas a la Ley Reguladora de la producción y Comercialización de las Bebidas Alcohólicas.

No obstante lo anterior, sí hubo hechos loables al finalizar el mes. Así, la Policía Nacional Civil, en la ejecución de dos operativos en San Salvador y San Miguel, rescató a dos personas quienes habían sido secuestradas en días anteriores. En ambos operativos se liberó a las víctimas y se procedió a la captura de unos 30 presuntos secuestradores. El 26, la Policía liberó a un infante que había sido plagiado el 16 de octubre. En el hecho fueron capturados 23 sospechosos. Al día siguiente, un joven de 19 años fue liberado de sus captores, que lo mantenían en cautiverio desde el 19 de octubre.

En suma, durante el transcurso de octubre fue posible rastrear una tendencia polarizada en la vida política nacional, en tanto que no sólo dentro de la Asamblea Legislativa, sino en la opinión misma de la ciudadanía en general, pasando por las principales instituciones de justicia, se han abierto —o, en todo caso, ampliado— espacios de confrontación alimentados por intereses partidaristas y particulares.

En el ámbito económico, la incertidumbre de la economía mundial ante los atentados terroristas en Estados Unidos de septiembre pasado había ca-

lado ya en la economía nacional. Aunque la coyuntura económica —antes de la explosión de la llamada “primera gran crisis del siglo”— ya daba signos claros de preocupación. Esto se explicaba por un deterioro de las principales variables macroeconómicas y por el desvanecimiento de las proyecciones optimistas trazadas al despunte del año. Tal fue el caso de la actividad maquilera, cuya disminución fue notoria, a pesar de que el presidente Flores y su gabinete económico se empeñaron en afirmar que era un sector en pleno auge. Las perspectivas de crecimiento económico tuvieron que ser corregidas como consecuencia de la caída del valor de las exportaciones tradicionales y por los todavía palpables efectos de los terremotos de enero y febrero. En El Salvador —y, en general, en Centroamérica—, básicamente han sido tres los flancos “atacados” desde el desenlace de los atentados terroristas: la maquila, el turismo y las remesas familiares. Cabe mencionar que, excepto el primero, los demás rubros sí habían mostrado un repunte antes de los actos terroristas. Así, la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) había señalado, el 29 de septiembre, que los ingresos provenientes del turismo podrían caer, a final del año, alrededor de un 20 por ciento, a causa de los atentados terroristas y los terremotos. Esta cifra, empero, fue menor posteriormente. Para el caso de las remesas, el ministro de Hacienda, Juan José Daboub, reconoció en octubre que el crecimiento de las remesas familiares en el presente año sería significativo, aunque inferior al registrado en 2000. Ese año, las remesas totalizaron mil 750 millones de dólares, cifra que según el PNUD superó las exportaciones totales del país.

Pero uno de los sectores más sintomáticos de la actual situación siguió siendo el cafetalero. El año cafetero 2000-2001 que concluyó el 1 de octubre quedará como uno de los peores en la historia de la cosecha del cultivo. Con una venta de 2 millones de sacos de 46 kilos frente a los 3.1 millones en la cosecha 1999-2000, se registraron pérdidas por el orden de los 630 millones de dólares. Según el Consejo Salvadoreño del Café (CSC), las exportaciones del grano entre el 1 de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001 sufrieron una reducción del 58 por ciento en las ventas, dejando al sector pérdidas por 180 millones de dólares. Asimismo, el valor de las exportaciones de la actual cosecha cayó a 131 millones 287 mil dólares, frente a los 311 millones 505 mil dólares registrados en la cosecha anterior. Posteriormente, el 4, el

CSC informó que el precio internacional del grano cayó a su peor nivel en 26 años, situándose a 46.75 dólares por quintal. Dicho precio no se registraba desde 1975. “La situación fundamental permanece sombría, las noticias sobre una producción muy grande para este nuevo año empañan el desempeño del mercado”, rezaba un comunicado del CSC. El comisionado presidencial para la Promoción y Negociaciones en Café, Herberth de Sola, manifestó su preocupación por la posibilidad de que la siguiente cosecha del grano no llegara a realizarse, debido a la carestía de fondos padecida por los productores. El director ejecutivo del CSC, Ricardo Espitia, expresó que “la crisis es de tal magnitud que se escapa de la capacidad de las gremiales cafetaleras y de las instituciones para hacerles frente”.

Con estos indicadores no podía esperarse sino preocupación y una búsqueda de soluciones integrales, responsables y serias. Como parte de las acciones tendientes a paliar la crisis en el sector, los diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea analizaron, desde el 16, la ampliación del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Húmedo Cafetalero (FICAFE), con lo cual se pagaría la recolección del grano en la cosecha 2001-2002 que inició el 1 de octubre del presente año. Al día siguiente, la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) recomendó proveer a los productores de créditos hasta por 18 dólares por quintal y ampliar el programa de garantías del sector agropecuario (PROGARA). Sin embargo, el 19, la Unión de Cooperativas Cafetaleras (UCAFES) consideró que, con las medidas impulsadas por el gobierno, simplemente se acrecentarían las deudas de los calicultores y pidió, por el contrario, medidas extensibles a mediano y largo plazo. En suma, esta última opinión no hizo más que evidenciar la tendencia de las medidas impulsadas por el sector gubernamental y privado: con soluciones provisionales han pretendido maquillar una realidad que se ha impuesto y que exige programas extensibles a largo plazo o, en otro caso, potenciar la diversificación de cultivos alternativos. Además, la crisis en el cultivo de café —consideremos la cali-cultura— permitió a algunos sectores hacer una revisión de la situación del agro nacional y de la articulación con los otros ejes económicos. Como se ha hecho tradición desde hace años, el agro nacional ha sido huérfano de políticas integrales por parte del gobierno.

A propósito, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) diagnosticó que los bancos

estatales no cumplían con el rol para el que fueron creados (desarrollo del sector agropecuario y de la micro y pequeña empresa). El 1, ANEP solicitó que se incrementaran los controles en las finanzas de dichas instituciones financieras, para evitar los problemas de corrupción y mala administración. Es de señalar que la desarticulación entre el sistema financiero y el agro ha sido precisamente uno de los causantes de la crisis de este último. Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería y presidente de la Junta de Gobernadores del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Salvador Urrutia, reveló, a principios de mes, que se preparaba un anteproyecto de ley para inyectarle otros 50 millones de colones al BFA. Urrutia informó que se pensaba reorientar las actividades del banco para otorgar créditos a sectores agropecuarios, actividades productivas rurales y de la micro y pequeña empresa. No obstante la urgencia del tema, la cuestión no fue vuelta a tocar por los medios.

Aunque el gobierno ha puesto oídos sordos al sempiterno problema del agro, sí se ha preocupado por las negociaciones comerciales. Precisamente, uno de los caminos que el gobierno ha seguido para paliar la crisis económica es la negociación de tratados comerciales con los países vecinos. El 4, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana y El Salvador, siendo este último el primer país centroamericano en practicar libre comercio con los caribeños. El tratado establece aranceles preferenciales y reglas equitativas y seguras entre la mercadería de ambos países. En 2000, las exportaciones salvadoreñas a ese país ascendieron a 12.2 millones de dólares, mientras que, para este año, el Ministerio de Economía y la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) esperan que aquéllas lleguen a los 15 millones de dólares. El ministro de Economía, Miguel Lacayo, comentó que "El Salvador ingresa a un mercado atractivo que, en buena medida, sigue cerrado para el mundo". El ministro agregó que "República Dominicana es una nación con un mercado de más de ocho millones de consumidores, cuya economía se basa, principalmente, en servicios, maquila y turismo". Según la directora ejecutiva de COEXPORT, Silvia Cuéllar, "entre los productos que ya se exportan exitosamente están: telas de algodón y sintéticas, hilados, productos de limpieza, bolsas de papel y cajas de cartón, lápices, medicamentos, ropa, jugos envasados y algunos alimentos".

En este escenario polifacético, el 7 dio inició la ofensiva militar estadounidense en Afganistán, causando más preocupación en los actores económicos nacionales. Uno de los efectos colaterales de la amenaza terrorista había sido el desequilibrio productivo y financiero en Estados Unidos, principal socio comercial de Latinoamérica y de El Salvador, en particular. Se temía que las acciones militares en aquella región provocaran el desplazamiento de la necesidad de insumos tradicionales —productos fundamentalmente en los países latinoamericanos— hacia los insumos de guerra, además de la disminución del ingreso de remesas familiares procedentes de salvadoreños en el extranjero.

En otras palabras, la demanda de productos tradicionales que El Salvador y la región centroamericana han exportado tradicionalmente hacia Estados Unidos sufriría una reducción significativa, causando así la paralización de algunas actividades en diferentes rubros. Para la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), el país resultaría afectado debido a la ausencia de producción de insumos para la guerra. "En un escenario de guerra, Estados Unidos va a importar otros insumos que necesita, y en los cuales nosotros no tenemos participación, y eso será un efecto positivo que no tendremos en la región", afirmó el director ejecutivo de la gremial, Jorge Arriaza. La ANEP reveló que se encontraban en proceso de evaluación, a fin de mermar los efectos negativos para el aparato productivo salvadoreño. "Como país tenemos que tomar medidas para que los impactos negativos que va a tener E.U.A. no nos afecten tanto. Estamos evaluando un paquete de medidas", comentó Luis Mario Rodríguez, de la gremial empresarial. Finalmente, para Roberto Rubio, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), "si el conflicto se extiende a Iraq e Irán y se ejecuta el llamado a la Guerra Santa, podría darse una presión en los precios". Como quiera que sea, el clima de tensión generado por la amenaza de terrorismo y por la ofensiva militar estadounidense impactarían, a diferente escala, en la economía nacional.

Octubre fue escenario además, de las discusiones en torno al Presupuesto General de la Nación correspondiente a 2002 y respecto de las escasas perspectivas de crecimiento de la economía nacional. Desde principios de mes, el gobierno esperaba que la Asamblea aprobara la emisión de bonos por un monto de 472 millones de dólares, parte de los

cuales servirían para financiar un segmento importante de la inversión pública en el próximo año. Según el ministro de Hacienda, Juan José Daboub, los rubros de Salud y Educación serían prioritarios en la inversión pública durante 2002. En ese marco de discusión, el 11, FUSADES, durante la presentación del "Análisis del Presupuesto General de la Nación" vaticinó que la economía salvadoreña crecería sólo 1.5 por ciento del producto interno bruto al cerrar el año. Tres meses antes, la misma institución había proyectado un crecimiento del 2 por ciento. Para FUSADES, el impacto de los ataques terroristas habría profundizado el lento crecimiento de la economía mundial, estadounidense y salvadoreña. Según el analista Roberto Rivera Campos de la gremial, para alcanzar un promedio del 2 por ciento se necesitaría que el producto interno bruto de los últimos dos trimestres de 2001 llegase a más de 2 por ciento, algo casi imposible dadas las condiciones internas y externas de la economía nacional.

No obstante, las siempre optimistas estimaciones gubernamentales colocaban el crecimiento en 2 por ciento. El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Rafael Barraza, sostuvo que las causas del bajo crecimiento se podían rastrear en los altos precios del petróleo y la baja cotización del café. "En enero de 1998, con un saco de café se compraban 11.3 barriles de petróleo, mientras que en agosto de 2001 con el mismo saco del grano sólo se podía comprar 1.5 barriles del crudo", aseguró Barraza. Finalmente, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Antonio Saca, estimó que el crecimiento económico "no será mayor de 1.5 por ciento". Sin más, otro de los aspectos preocupantes en torno al Presupuesto General de 2002 ha sido su dependencia de los recursos externos. En efecto, de los 740.9 millones de dólares de inversión pública programada para el próximo año, el gobierno central invertirá 465.4 millones de dólares, y de éstos, a su vez, el 48.59 por ciento proviene del financiamiento externo. Así, de un total de 2 mil 504.1 millones de dólares a que asciende el total del Presupuesto General, el 27.2 por ciento corresponde a financiamiento a través de préstamos externos, o emisión de bonos y títulos valores.

Otra de las iniciativas gubernamentales, conforme a su política económica, siguió siendo el acercamiento comercial con Estados Unidos, para aprovechar las oportunidades existentes. El 12, los confeccionistas centroamericanos y caribeños be-

neficiados por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) se reunieron en la ciudad de San Salvador, para discutir la situación de su sector ante la crisis estadounidense. El Consejo Centroamericano y Caribeño de la Confección (CACTAC) decidió redoblar esfuerzos en el Congreso estadounidense, para lograr la paridad de condiciones entre la región y los países de la Comunidad Andina. Hay que acotar que éstos últimos pueden vender, libre de impuestos, 500 millones de metros cuadrados de ropa, mientras que los miembros de la ICC sólo la mitad, es decir, 250 millones de metros cuadrados, utilizando hilo estadounidense. "Si no nos igualan los beneficios comerciales de la ICC, con los de la Comunidad Andina, los inversionistas de la región se irán a las zonas francas andinas", expresó Gilberto Wong, secretario ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas de Nicaragua.

El presidente de CACTAC, el salvadoreño Francisco Escobar Thompson, aseguró con optimismo que "las compañías americanas tienen miedo de mandar a sus ejecutivos, o que por la guerra no puedan cumplirse los tiempos. Están reevaluando y en esa reevaluación el que sale como ganador es la ICC". Con todo, Thompson se mostró optimista ante el futuro del sector textil en la actual coyuntura. El optimismo se acrecentó luego que una Comisión de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobara aumentar las cuotas a los confeccionistas de la ICC. Sin embargo, este fue sólo uno de los escalones en el proceso, dado que la iniciativa tendría que desfilar por todas las etapas correspondientes en el Senado, donde hay una fuerte oposición a la ampliación de los beneficios.

Para cerrar el mes, las iniciativas fiscales impulsadas por el Ejecutivo encontraron un mayor eco en la opinión pública nacional; seguramente, se debió a que aquéllas se orientaron —so pretexto de tener un mayor control— a los sectores cuyos ingresos no son precisamente los más altos. El ministerio de Hacienda se propuso, en octubre, continuar con una ofensiva fiscal en el intento por mejorar las recaudaciones tributarias. Hacienda proyectó recaudar unos 50 millones de dólares, a partir de 2002, mediante la aplicación de tres medidas: primero, la eliminación de la base exenta de 75 mil colones (8,571.4 dólares) en pago de Impuesto sobre la Renta; segundo, la Ley de Infracciones Aduaneras; y, tercero, el monotributo o "Impuesto único". Al final, el fisco logró la aprobación de las dos primeras iniciativas, mientras que la

tercera no corrió la misma suerte. Así, el 18, la micro y pequeña empresa sufrió un duro golpe, luego que los diputados de la Asamblea reformaran la Ley de Impuesto sobre la Renta. Con la enmienda, se eliminaba la exención a que se vieron beneficiadas las empresas, cuyas utilidades anuales llegarán hasta los 75 mil colones.

Tanto la Asociación Nacional de la Empresa Privada como la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios y la Cámara de Comercio e Industria deploraron la medida. Ese mismo día, sin embargo, no pudo ser aprobada la tercera iniciativa. La Comisión de Hacienda de la Asamblea discutía el anteproyecto de Ley de Tributo Único, el cual sustituiría en algunos puntos al Impuesto sobre la Renta y el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Con la disposición tributaria estarían obligadas aquellas personas que realizaren actividades informales que les generen salarios mayores a 476.11 dólares. Uno de los impulsores del anteproyecto, el diputado peccenista Dagoberto Marroquín, aseguró que "la ley lo que busca, fundamentalmente, es controlar al sector informal".

El 23, los medios pusieron en evidencia los diferentes puntos de vista entre el ministro de Hacienda y la empresa privada. Daboub expresó que el monotributo "es una medida de justicia y equidad", mientras que para el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Napoleón Guerrero, "se está tomando la medida más fácil". El 24, el presidente Francisco Flores —contradiciendo a su ministro de Hacienda— expresó que el monotributo "no es propuesta nuestra ni es una prioridad, ni lo estamos empujando nosotros", reduciendo así las aspiraciones del anteproyecto. El 22, Hacienda puso en ejecución el "Plan Cien" en las aduanas y fronteras de país, para disminuir la evasión fiscal y, de paso, tomar medidas en contra del terrorismo y el contrabando. Hasta el 28, la recaudación fiscal aumentó un 26 por ciento, pasando de un ingreso promedio diario de 2 millones a 3.5 millones de dólares. Además, el plan había permitido identificar unos cien "puntos ciegos" en las zonas fronterizas, por donde habría ingresado mercadería ilegalmente.

Por otro lado, ha sido en el ámbito social, en donde se han traducido los altercados gestados a un nivel político. La falta de coordinación del gobierno central y de los gobiernos municipales —especialmente los administrados por el FMLN— ha llevado a situaciones que rozan la precariedad, in-

seguridad, abandono, desatención y marginación. Aunque el problema del agua no levantó tantas opiniones como en septiembre pasado, no significa que se ha llegado a un entendimiento entre autoridades y ciudadanía. La mala calidad del agua sigue siendo uno de los principales factores incidentes en los niveles de desnutrición en El Salvador.

En similares términos, puede hablarse respecto del tema de la basura. Este último sí ha tenido presencia en los medios desde que Medio Ambiente y alcaldes se enfrentaran por la viabilidad de instalar una planta de tratamiento de basura en territorio que, según una recomendación de la Administración de Acueductos y Alcantarillados, "podría" causar daños en los mantos acuíferos locales, a pesar de que los estudios técnicos realizados por los alcaldes del Gran San Salvador demostraran lo contrario. Al respecto, el 3, la resucitada comisión para estudiar el manejo de la basura se convirtió en escenario de una disputa verbal entre la procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, y los diputados de ARENA. El origen de la discusión fue el dictamen de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH), que aducía la ausencia de razones para dejar de construir la planta de tratamiento de basura en el municipio de Apopa.

El 11, los alcaldes de Nejapa, Soyapango y San Salvador, René Canjura, Marta de Rodríguez y Héctor Silva, respectivamente, criticaron la decisión del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que prohibió la instalación de la planta en el referido municipio. "A la ministra de Ambiente no le tembló el pulso para avalar las construcciones en la finca El Espino (principal zona verde de San Salvador)", expresó Canjura. Por su parte, Silva explicó que, ante la negativa del MARN, podrían seguirse al menos tres alternativas: acudir a la Corte Suprema de Justicia, buscar otro terreno o adoptar medidas locales para el tratamiento de la basura. Las tres medidas implicarían mayores desembolsos económicos y la inversión de más tiempo. El 25, el jefe edilicio capitalino en funciones, Francisco Altschul, informó que los 10 alcaldes del área Metropolitana de San Salvador no abandonarían su iniciativa y acudirían a las instancias necesarias para realizar su proyecto.

Uno de los temas de suma importancia ha sido la eterna lucha por ordenar el tráfico, la circulación de personas y las ventas en la ciudad capital. Los intentos se han traducido en disturbios, desalojos forzados y paralizaciones de labores. El 4, el

Viceministerio de Transporte (VMT) inició la instalación de las 143 nuevas "paradas" de autobús en San Salvador, como parte del Plan de Reordenamiento del Transporte Colectivo en el Distrito Comercial Central. Uno de los principales objetivos del plan es el descongestionamiento del centro capitalino al reducir el ingreso de unidades de transporte público dentro del área señalada. Las tres principales gremiales de transporte público, Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS 1 y 2) y la Asociación de Empresarios de Transporte de Pasajeros (ATP) coincidieron el 12, en realizar acciones de protesta en rechazo del plan impulsado por el VMT. Los empresarios argumentaron que no les fue consultada la medida. Desde el 22, empresarios de autobuses de Cojutepeque y Soyapango llevaron a cabo "paros" de transporte, en respuesta a lo que ellos llamaron "competencia desleal", por parte de los microbuses de transporte público. El 26, dio inicio el plan de reordenamiento en San Salvador, a la par de la oposición de los tres principales gremiales. En términos generales, la iniciativa fue calificada como positiva por la ciudadanía.

Otro de los sectores que mostraron su descontento con el reordenamiento de la capital fue el de los comerciantes informales quienes, apostados en las calles y aceras de la ciudad impiden la libre circulación de vehículos y personas. En San Salvador se dieron una serie de protestas callejeras desde el 23. Ese día, vendedores estacionarios se concentraron frente a las oficinas centrales de la alcaldía capitalina, donde el viceministro de Transporte, Ricardo Yúdice, se reunió con el concejo capitalino para explicarles el plan de reordenamiento en el Centro Histórico de San Salvador. Los vendedores exigían a las autoridades municipales una prórroga en el desalojo de sus puestos, los cuales, de acuerdo al referido plan, debían ser reubicados en otro sitio. A mitad del día, una comitiva de los comerciantes se reunió con autoridades municipales y se acordó aplazar la reubicación en una semana. Estas acciones de protesta no dejaron ningún hecho que lamentar; sin embargo, a la tarde del día siguiente, otro grupo de personas inconformes con las autoridades confrontó con la Policía, hasta desencadenar acciones violentas.

Los ex paramilitares desmovilizados tras los acuerdos de paz, intentaron ingresar a la zona del Centro de Gobierno en San Salvador y, al enfrentarse con la Policía, causaron daños en propiedad pública y privada, más lesiones graves en tres

agentes policiales. Al final de los lamentables hechos fue creada una "comisión de garantes". Inmediatamente, el presidente de la República, Francisco Flores, declaró que falsos líderes han manipulado a los ex patrulleros. Flores dejó claro que el gobierno ya no les compensaría con ayuda económica, pues ellos ya se han beneficiado del Programa de Solidaridad Rural, impulsada por instituciones gubernamentales. El 25, la Policía Nacional Civil pidió a la Fiscalía que se ordenara la captura de tres dirigentes de los ex patrulleros, por su presunta responsabilidad en los disturbios ocurridos en el Centro de Gobierno. El 26, dos de los dirigentes fueron capturados por la Policía, mientras el Ministerio Público dijo tener los suficientes elementos para llevarlos a los tribunales de justicia.

Finalmente, como ya se ha señalado, las iniciativas de los gobiernos municipales liderados por la oposición política no siempre han contado con el respaldo del gobierno central. La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) concluyó, el 19, su XVII Congreso Nacional, reiterando su respaldo a la aprobación de 1,200 millones de dólares en préstamos internacionales y al Fondo Vial. Por otro lado, los alcaldes mandaron al archivo el cabildeo que buscaba un incremento de 2 puntos porcentuales a los fondos destinados para las municipalidades y que fuera liderada por los ediles efemelenistas. "Los alcaldes areneros tomaron una decisión absurda", comentó el edil capitalino, Héctor Silva. ARENA ya había asumido su posición luego de que, el 17, los 127 alcaldes del partido y la cúpula partidaria se reunieran en privado para fijar posición sobre las pretensiones de COMURES. El COENA se mostró claro en rechazar un aumento al 8 por ciento del presupuesto a las municipalidades y apostó a la aprobación legislativa de los préstamos internacionales.

En definitiva, las dinámicas ocurridas en octubre revelaron que las demandas sociales de la ciudadanía no han sido satisfechas por las autoridades. Los intereses económicos y la orientación política se han enseñoreado de la agenda de los que tienen el poder de decidir a su antojo el rumbo del país. Las acciones de protesta de algunos sectores han puesto de manifiesto la incapacidad de las autoridades para responder a las demandas de la ciudadanía. Una mayor polarización social, la amenaza del terrorismo internacional, el deterioro de la economía nacional y la insatisfacción de los sectores sociales hacen del país menos viable y vivible.